

3.7. Fortalezas y debilidades.

En el capítulo que nos ocupa abordaremos algunas de las conclusiones a las que hemos llegado después de realizar diversas actividades de campo sobre la administración de justicia y el respeto a los derechos humanos de las mujeres por parte del sistema penal mexicano. Para obtener resultados satisfactorios para el estudio, realizamos actividades que nos permitieron obtener elementos tanto subjetivos como objetivos sobre el sistema penal y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en la administración de justicia. Entre las actividades que nos permitieron obtener los resultados que plasmaremos encontramos las referidas a las percepciones (parte subjetiva) del sistema, a saber: la aplicación de encuestas a las/os funcionarias/os de los juzgados penales, la aplicación de encuestas a abogadas/abogados litigantes en materia penal, encuestas aplicadas a las/los usuarias/os del servicio de administración de justicia, a partir de ello el equipo de trabajo se ha dado a la tarea de realizar entrevistas a funcionarios y funcionarias, usuarios y usuarias; así como las y los abogados. Por otra parte se realizaron actividades que nos permitieron obtener los resultados siendo propiamente el análisis, estudio y evaluación de los expedientes, con los que se evaluó el nivel de cumplimiento real de los principios legales contenidos en nuestro orden jurídico y en las normas internacionales que regulan la protección de los derechos de las mujeres, a través del análisis de casos que involucran diversos delitos cometidos en contra de las mujeres; el cual se efectuó en todas y cada una de las etapas jurisdiccionales, dando seguimiento a las causas desde la integración de las averiguaciones previas hasta su paso por los juzgados de primera y segunda instancia y concluyendo en las actividades y actuaciones de las autoridades del sistema judicial federal. Con los resultados obtenidos de todas las actividades mencionadas, procedemos a mencionar fortalezas y debilidades detectadas tanto en el actuar de los Agentes del Ministerio Público y de los Juzgadores en el ámbito penal de primera instancia, los que se encuentran en Tribunales de Segunda Instancia (Salas Penales) así como de quienes tienen bajo su responsabilidad los Tribunales Federales (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en materia penal).

Entidad Federativa AC

A partir del análisis de los expedientes, percepciones y visitas *in situ* se desprende lo siguiente: en el ámbito penal los expedientes analizados no mostraron que se hayan tomado medidas de protección para víctimas de violencia familiar: las excepciones encontradas fueron en el caso de que hubieran menores de edad involucradas.

Además en este tipo de delito y en otros donde la víctima es mujer junto con sus hijos, como es el caso de abandono de las obligaciones familiares, por lo general éstos terminan por perdón de la ofendida, lo cual nos lleva a considerar que muchos de ellos fueron inducidos por parte de la autoridad, esta hipótesis se robustece con las encuestas realizadas a funcionarios públicos donde señalan que sí promueven la conciliación entre el indiciado y la ofendida.

Es evidente la falta de capacitación no solo en cuanto a derechos humanos de las mujeres respecto al uso de tratados internacionales y perspectiva de género; reafirma lo anterior que de los expedientes analizados no existe alguna emitida con fundamento en un tratado internacional. Nadie mencionó conocer un tratado internacional que se relacione con el tema que nos ocupa, de ahí la indiferencia con la cual atienden los asuntos de las mujeres justificándose en el principio de igualdad y la supuesta objetividad que debe prevalecer en el juzgador, pasando por alto todo aquello que mandatan los convenios internacionales de la CEDAW y Belém do Pará.

Asimismo cuando se trata de asuntos que involucran a las mujeres se carece de espacios privados donde se atiendan a víctimas de delitos de violencia familiar o de otros delitos, cámaras Gessel, modelos de atención, entre otros.

La mayoría de las debilidades en los funcionarios judiciales aluden a la falta de capacitación en: Perspectiva de género y conocimiento de los Tratados Internacionales, concretamente CEDAW y Belém Do Pará.

De las fortalezas que se aprecian en los funcionarios Judiciales están la preparación, honestidad, independencia y autonomía en sus resoluciones, según criterio de los encuestados, mismos que se ven opacados al no aplicar los convenios internacionales, así como no afrontar el proceso ni la resolución del mismo con una perspectiva de género aspecto mandatado en los citados instrumentos internacionales.

En cuanto a la procuración de justicia en el ámbito familiar no hay ninguna novedad en cuanto al tratamiento de los asuntos relativos a juicios de divorcio contencioso, no se toman medidas preventivas para el aseguramiento de la víctima de violencia y su familia aunque este planteada en la demanda la peligrosidad del agresor, solo se hace en caso de que la víctima lo solicite (lo más frecuente que solicitan es el depósito de personas y éste es promovido por ella misma); aún cuando está facultado por la ley para tomar medidas preventivas que conlleven a la seguridad de la promovente y su familia funcionarios de los Juzgados familiares contradiciendo los contenidos de la CEDAW y Belém Do Pará.

De los expedientes analizados se aprecia que en muchos de ellos las mujeres se desisten por acuerdos con la pareja, lo que nuevamente representa un riesgo para las víctimas especialmente por la falta de seguimiento a los casos.

El personal de los Juzgados familiares encuestados que si bien han realizado cursos de capacitación ninguno se refiere a perspectiva de género ni a Tratados Internacionales que protejan los derechos humanos de las mujeres.

Respecto a las debilidades en los Juzgados familiares, los mismos presentan una sobrecarga de trabajo, que redundará en la atención a las mujeres que solicitan

Tampoco se aplican modelos de intervención a víctimas de violencia y no existen espacios hacia donde canalizarlas.

Llama la atención las respuestas que hacen los funcionarios de los juzgados penales y familiares en las encuestas, no obstante hay una mayor sensibilidad en el personal de los juzgados familiares.

Entidad Federativa AE

Fortalezas:

Las actuaciones de las/los Agentes del Ministerio Público, son ágiles en gran medida, lo cual conlleva a una rápida integración de las averiguaciones previas que permite la pronta administración de justicia a las/los interesados, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos en contra de las mujeres.

Hay suficientes Agencias del Ministerio Público que se encuentran debidamente distribuidas en el territorio, lo que permite un fácil acceso a las instalaciones de administración de justicia.

Es oportuno manifestar que la Procuraduría General de Justicia de AE creó Fiscalías Especiales para la atención de la mayoría de los delitos que estudiamos, sobre todo con una clara tendencia de proteger a las mujeres, que por estadística son la mayoría en cuanto a víctimas de los delitos de orden sexual, por lo que para su investigación existe la Fiscalía Especial para Delitos Sexuales.

De igual forma podemos encontrar la Fiscalía Especial de Homicidios a la que corresponde la integración de averiguaciones previas por tales delitos; la Fiscalía Especial en Procesos de lo Familiar, a la que compete la integración de las averiguaciones previas iniciadas por violencia familiar e incumplimiento de deberes alimentarios. La Fiscalía del Menor, a la cual incumbe conocer de las averiguaciones previas por los delitos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, si la víctima es menor de edad, así como también indagatorias por violencia familiar, sobre todo si los probables responsables son los que ejercen la patria potestad, guarda y custodia o tutela de las víctimas.

En los delitos de orden sexual cometidos en contra de mujeres o menores de edad, casi siempre ordenan llevar a cabo tratamientos de asistencia psicológica a las víctimas, lo que les permite una pronta y en la medida de lo posible, una completa recuperación en cuanto a los daños causados por el evento lesivo.

Respecto de las Inspecciones Ministeriales efectuadas en el lugar de los hechos, hallamos que se encuentran realizadas correctamente, con todas y cada una de las señas específicas del lugar en que se practican, el tiempo en que se realiza y las personas que intervienen en ella, así como la debida descripción de los objetos que obtienen como pruebas en el desarrollo de las mismas.

Detectamos la práctica común, por parte de las/los Agentes del Ministerio Público, de determinar correctamente la notoria urgencia en los casos en que se cumplen los requisitos establecidos por la ley, esto, con la finalidad de poder retener al probable responsable y evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

De igual forma debemos recalcar que de manera correcta hacen saber al presunto responsable de la oportunidad que tiene de obtener su libertad provisional, en los casos en que así es operante y que se satisfacen los requisitos legales que establece la ley.

Dentro de la propia averiguación previa, detectamos que se plasman los números correspondientes de artículos constitucionales, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales que fundamentan las actuaciones del Ministerio Público, sin embargo, es muy común que no argumenten ni motiven la razón de sus actos.

En la Procuraduría General de Justicia de AE existen peritos especialista en diversas materias para poder esclarecer los hechos de una averiguación previa.

Cuentan con instalaciones y los medios tecnológicos idóneos para realizar sus dictámenes.

Cuentan con formatos previamente establecidos que les facilitan la emisión de sus dictámenes.

En los casos en que las mujeres son víctimas del delito, las periciales que se les practican son realizadas por personas del mismo sexo.

En cuanto a los estudios periciales que se realizan sobre menores, en su desarrollo siempre se encuentra su madre, padre o tutor para supervisar y avalar el dictamen.

Pudimos observar que el examen psicofísico se encuentra en un formato debidamente integrado, con todos los elementos que debe tener y debidamente firmado por el especialista que lo llevó a cabo.

Debemos comentar que en los expedientes analizados pudimos constatar que los peritajes se encuentran integrados de una manera completa, respecto de los aspectos solicitados por el Ministerio Público.

En cuanto a la preparación de las/os juezas/ces, la mayoría cuentan con grado de Maestría.

Existe en general, una buena infraestructura en los edificios que componen al Tribunal Superior de Justicia de AE.

Existe una buena relación con la Procuraduría General de Justicia de AE, sobre todo para con los Centros de Atención a víctimas del Delito, a donde las canalizan, para que de necesitarlo, sean debidamente asistidas.

En las resoluciones los jueces en términos generales invocan los criterios del Consejo en Pleno que permite una mejor consistencia, coherencia y predictibilidad de dichas resoluciones.

Se implementan controles estadísticos en términos generales sin que los datos se desagreguen por sexo, sin embargo, los datos no nos permiten observar las asimetrías existentes entre hombres y mujeres.

Existe una distribución equitativa de carga de trabajo a fin de poder solventar la misma en tiempo y forma.

Existe disposición de las/los funcionarios para trabajar incluso horas extras con tal de realizar y satisfacer las exigencias que denotan la carga de trabajo.

A pesar de ser rudimentario, existe un buen control de expedientes realizado con base en libros que permiten efectuar un debido seguimiento de las causas.

Existe una buena descripción estadística de los delitos, al ser presentadas y requeridas de manera mensual y anual a cada uno de los juzgados, refiriendo que incluyen algunos apartados con visión de género.

Existe un cumplimiento efectivo a la mayoría de los términos procesales.

La mayoría de resoluciones y actos de la autoridad judicial están fundamentados y motivados correctamente.

Existe un control adecuado para la defensa de los derechos tanto de las víctimas como de los procesados a través de los recursos existentes en la ley.

Algunas/os juezas/ces utilizan la perspectiva de género y promueven la equidad y erradicación de la discriminación de las mujeres

Se cumplen debidamente las exigencias en cuanto a formalidades de las actuaciones en el juzgado.

Durante la etapa procesal que en este momento estamos comentando, se detectó que siempre se le informa al Probable Responsable del delito del que se les acusa.

Debilidades:

La conceptualización sobre la fundamentación y motivación en todo acto de autoridad no es bien entendida ni mucho menos realizada correctamente por el Ministerio Público.

En la mayoría de los casos, durante la declaración del probable responsable, solo se asienta que se le hicieron saber los derechos que contienen diversas normas a su favor, sin insertar a la letra tales normas, situación que permitiría dejar asentada la debida constancia de su información.

Respecto a las víctimas no se les lee el contenido de los artículos que establecen los derechos que les corresponden, ni mucho menos se les da una explicación pormenorizada del contenido y alcance de dichos derechos.

No realizan la constancia escrita en la que se establezca lo anterior.

En ocasiones no solicita los dictámenes periciales pertinentes que le ayudarían de una manera más eficaz a esclarecer los hechos que se investigan.

No hacen del conocimiento de la víctima el que tiene la posibilidad de participar como coadyuvante para obtener la debida reparación del daño.

No tienen contacto con instituciones de asistencia pública o privada que les permita canalizar a las víctimas a alguna institución que les brinde asistencia, ya sea médica, psicológica o legal.

Los peritajes que solicita en materia de psicología solo los utiliza para comprobar el cuerpo del delito, más nunca como asistencia propiamente dicha, ya que no establecen un tratamiento correctivo para los daños sufridos.

Nunca ordenan la práctica de actos o diligencias que tengan como finalidad el acreditar el monto para la reparación del daño. Siempre se limitan a fijar en caso de delitos sexuales un presupuesto para tratamientos sin determinar costo específico del mismo.

No existe una capacitación para los Agentes del Ministerio Público que les permita entender la existencia de la violencia y discriminación que se realiza diariamente en contra de las mujeres, por lo cual y sobre todo en ese tema, prevalecen los prejuicios que afectan la debida administración de justicia.

Nunca fundamentan y motivan correctamente la acreditación del cuerpo del delito ni establecen los argumentos que lo llevaron a tenerlo por acreditado, ya que es muy común el leer “y con tales medios de prueba se tiene por acreditado el cuerpo del delito”.

No establecen concretamente la razón o motivo que los llevo a determinar el nexo causal entre la conducta y el resultado del acto típico.

Es común que en ningún caso otorguen medidas precautorias para proteger a las víctimas del delito.

Al consignar no se señalan los elementos que obren en la averiguación previa tendientes a acreditar el monto de la reparación del daño a la víctima u ofendido.

Al consignar nunca realizan pedimento alguno al Juez a efecto de garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendida.

En las órdenes de aprehensión no se fundamenta ni motiva la comprobación del cuerpo del delito.

En la mayoría de las averiguaciones previas nunca se manifiestan respecto de la prescripción del delito.

No realizan un pedimento específico en cuanto a la pena que el juez debe imponer al probable responsable en el caso de que sea condenado como culpable.

En el pliego de consignación no refiere una cantidad liquida ni las bases para su cuantificación respecto del pago del daño a la víctima u ofendida.

En la consignación otorga valor probatorio pleno a las pruebas sin manifestar los fundamentos ni motivos para realizarlo.

No encontramos en los casos de violencia familiar que hayan sido otorgadas medidas de protección a la víctima.

No existe capacitación para los y las agentes del Ministerio Público en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.

No hay conocimiento ni mucho menos aplicación en las agencias del Ministerio Público de los principios contenidos en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, contenidas sobre todo en las convenciones de CEDAW y Belém Do Pará.

No hay una capacitación especial para los/las Agentes del Ministerio Público en materia de los delitos cometidos en contra de mujeres o menores.

Los dictámenes periciales no contienen la explicación del método que se empleo para obtener las conclusiones.

Las conclusiones no se encuentran debidamente argumentadas ni tienen sustento para ser emitidas.

En nuestro estudio hayamos que al practicarse el exámen médico al Probable Responsable, después de haber sido detenido por la autoridad y remitido; el médico, sin excepción alguna y en todos los expedientes revisados, siempre dictamina lo siguiente: *“lesiones que tardan en sanar menos de quince días”* sin tener dicho estudio un sustento científico que le diera respaldo.

No existe la suficiencia en recursos humanos para atender de manera pronta los requerimientos de las agencias del ministerio Público y así poder rendir de manera rápida los dictámenes solicitados.

Insuficiencia tanto de recursos humanos como materiales que les permita hacer frente de una manera eficaz a la carga de trabajo con que cuentan.

No existe una sistematización adecuada para el seguimiento de causas.

No existen programas de capacitación adecuada en el tema de derechos humanos de las mujeres que provea a las/los funcionarios del juzgado de una visión de género.

No existen espacios especiales para la celebración de audiencias en donde las víctimas mujeres o menores de edad requieran protección.

No poseen los medios electrónicos necesarios para llevar a cabo diligencias en las que sea necesario salvaguardar derechos de víctimas mujeres y hombres.

No todas/os los/las funcionarias/os que laboran en un Juzgado Penal orientan a la víctima, dado que no todos tienen contacto con ella, lo que no exime de la falta de preparación o capacitación para que en el momento necesario lo efectúen, ni mucho menos que por el simple hecho de no tener contacto con la víctima, no preponderen los derechos humanos de las mujeres y menores víctimas de delitos.

No todas/os los/las funcionarias/os que laboran en un Juzgado Penal otorgan medidas de protección para salvaguardar los derechos e intereses de la mujeres, menores o cualquier otra persona en situaciones de desventaja o vulnerabilidad, incluso siendo su responsabilidad, esto se debe a la falta de capacitación en los temas de derechos humanos de la que carecen las personas que laboran en los juzgados penales y que son los que tienen que velar por la justa defensa de los derechos de las sociedad, así como por la justa y pronta aplicación de la justicia en México.

No existen criterios de aplicación, políticas, manuales o lineamientos que permitan una adecuada y eficiente atención de mujeres y/o menores víctimas de delitos, a seguir en los Juzgados penales.

No existe capacitación sobre los Tratados Internacionales de derechos humanos a favor de la Mujer o las menores víctimas de delitos, ni mucho menos sobre su aplicación en nuestro sistema de justicia.

No existen programas de ayuda o atención psicológica para los/las funcionarias/os que laboran en los juzgado penales y que están en contacto directo con situaciones de alta carga emocional.

No existen flujogramas que mejoren el manejo administrativo de las causas en los juzgados penales en AE.

No se han propuesto, desarrollado o implementado tecnologías novedosas, que faciliten las labores de los juzgados penales del D.F.

No existen criterios fijos para llevar a cabo reuniones en los juzgados penales a efecto de homologar criterios y actuaciones. Y cuando los hay no se hace partícipe de ello a todos los/las funcionarias/os por igual.

Los salarios que paga el Tribunal Superior de Justicia de AE, no son acordes con la excesiva carga de trabajo que existe en los juzgados penales de primera instancia.

El personal de los juzgados no cuenta con apoyo para la atención de sus familias por parte del Tribunal ni ninguna otra institución, en los casos de sobrecarga de trabajo.

El personal auxiliar con el que cuentan los juzgados penales es insuficiente para las actividades que se desarrollan en el mismo.

No hay medidas de apoyo, atención o protección para los empleados de los juzgados penales o sus familias.

No existe publicidad a través de los medios respectivos para que se invite a las/los usuarias/os a utilizar los servicios de mediación alternos.

En la mayoría de las sentencias se absuelve del pago de la reparación del daño, por no haberse establecido por el ministerio publico.

La queja generalizada de la sobrecarga de trabajo y la deficiente preparación de los Defensores de Oficio.

Un problema generalizado detectado es que en el Acta de Consignación, no se analizan debidamente las posibles deficiencias del Ministerio Público, principalmente en cuanto al nivel de vulnerabilidad e indefensión de la víctima denunciante en cuanto a su verdadera edad, si tiene alguna discapacidad, si es o no propensa a la discriminación, si pertenece o no a algún grupo étnico, etc.

Es muy común que en el Auto de Radicación se omita fijar la competencia.

En cuanto al pago de la Reparación del Daño, detectamos que es una práctica generalizada ignorar ó minimizar la petición del pago de la misma para los casos en los que el Ministerio Público la solicita. El argumento al que acuden los juzgadores para actuar en dicho sentido, principalmente en casos de Daño Moral, es “la falta de posibilidad de cuantificación del daño”, eludiendo así el cumplimiento de lo ordenado por el Código de Procedimientos Penales.

Detectamos que es muy común que en la Declaración Preparatoria se omita hacer del conocimiento del Probable Responsable las garantías que le otorgan tanto el Artículo 20 Constitucional y el Código de Procedimientos Penales.

Al igual que en AL, detectamos la práctica generalizada, para los casos de víctimas de delitos sexuales, de omitir ordenar y dar seguimiento a la reparación del daño psicológico, siendo esta omisión más grave para aquellos casos en los que la víctima es menor de edad.

Otra práctica habitual detectada tanto en AL como en AE durante el análisis de expedientes efectuado, así como en las visitas realizadas a los diversos juzgados, es que el juzgador muy ocasionalmente está presente en las actuaciones, por tanto, no es muy frecuente que tenga contacto con el procesado o con la víctima.

Cuando la víctima es menor de edad, no se asegura que sus intereses estén debidamente representados por el Ministerio Público adscrito.

Para el caso de abuso sexual, la reparación del daño moral no se da debido a que no existen elementos conforme a los cuales se pueda calcular el monto de la misma, cuando se debería de tener una cantidad fija estimada, con respecto a que la víctima podría tener consecuencias de carácter psicológico después de haber sufrido la agresión.

Hemos detectado que transcurre demasiado tiempo desde el momento que se presenta la denuncia y se dicta la sentencia, por lo que en la mayoría de los casos, la víctima prefiere no seguir el proceso u otorgar el perdón, debido al desgaste físico y sobre todo psicológico en caso de violación o abuso sexual.

Pudimos observar también que a la víctima nunca se le menciona que puede coadyuvar con el Ministerio Público y nunca se le ofrecen las medidas de protección.

El agente del Ministerio Público fundamenta y motiva sus acusaciones, aunque todas son muy parecidas como si únicamente fueran transcritas de otras realizadas con anterioridad.

Finalmente debemos comentar que el conocimiento respecto de los Derechos de las Mujeres consignados en los instrumentos internacionales de CEDAW y Belém do Pará es muy bajo y su aplicación es nula.

Se carece de privados especiales en donde se atiendan a víctimas de delitos de violencia familiar o de abandono de obligaciones familiares, cámara Gessel, modelos de atención, no obstante ser un edificio prácticamente nuevo.

En concreto la mayor de las debilidades que encontramos en los funcionarios judiciales son principalmente la falta de capacitación en: Perspectiva de género y conocimiento de los Tratados Internacionales, concretamente CEDAW y Belém do Pará.

Entidad Federativa AL

A continuación haremos un listado de las irregularidades más comúnmente observadas en la actuación de las y los funcionarios de AL:

Los periodos de integración de la Averiguación Previa son demasiado extensos. A pesar de ello, las Averiguaciones Previas generalmente están muy mal integradas.

Lo anterior se pudo constatar en la revisión de expedientes al momento en que el Ministerio Público presenta las conclusiones acusatorias, pues en múltiples ocasiones el Juzgador tiene que devolver el expediente al Ministerio Público para que lo integre debidamente, pues de otra forma sería imposible dar curso al juicio conforme a derecho.

Pudimos constatar también que en el desarrollo de las averiguaciones previas el Ministerio Público no realiza una investigación aguda de las circunstancias de cada caso pues se llevan a cabo muy pocos peritajes e Inspecciones Ministeriales.

Lo anterior afecta directamente en la calidad de la impartición de Justicia, pues se reduce el margen de certeza al momento de valorar las pruebas para poder dictar sentencia.

Además, respecto de los peritajes, debemos señalar que en los expedientes analizados, durante la Averiguación Previa, sólo pudimos encontrar el escrito donde se señala el resultado de los peritajes, sin que pudiéramos encontrar el documento de metodología, desarrollo y motivación de los mismos, lo que, desde luego, les quita prácticamente su valor probatorio. A pesar de ello, así son tomados en cuenta.

Otra cuestión que pudimos detectar en el análisis de los expedientes en el periodo de Averiguación Previa fue que en el desarrollo de la misma, no se hace referencia a los elementos del cuerpo del delito, sino hasta la consignación.

Aún así, al momento de hacer el correspondiente análisis lógico jurídico de los elementos del cuerpo del delito, se hace una simple mención de que “*se acredita el cuerpo del delito*”, sin llevar a cabo un análisis agudo, debidamente fundado y motivado, de todos y cada uno de los elementos, conforme a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Códigos adjetivo y sustantivo de la materia.

En la mayoría de los expedientes revisados de violación y actos libidinosos, dentro de los elementos del tipo penal, siempre se especifica que son de resultado material, cuando el resultado es formal, ya que no causan un cambio visible en el exterior.

Igualmente, en el Acta de Consignación, pudimos detectar que no se valora el nivel de vulnerabilidad e indefensión de la víctima-denunciante, esto es, no se constata la edad,

no se hace mención de si existe alguna discapacidad o pertenece a algún grupo étnico, etc.

Respecto al análisis de la legal detención del presunto responsable, debemos mencionar que en muy pocas ocasiones se agotó debidamente lo estipulado por el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni lo exigido por el Código de Procedimientos Penales.

No se cuenta con un protocolo para la certificación de lesiones, el cual permita la/el médica/o legista identificar lesiones internas y/o externas con base en la regulación estandarizada. Por falta de lo anterior es común que el certificado médico de lesiones carece de un respaldo metodológico descriptivo que pudiera sustentar lo dicho.

Es pertinente comentar también, que existe una deficiencia en la clasificación de las lesiones, provocando esto que en algunas ocasiones se decreta indebidamente la libertad bajo caución. No se garantiza la reparación del daño moral.

Detectamos que para el caso de estar involucradas personas menores de edad en situación de vulnerabilidad o peligro, inmediatamente se da parte al DIF, lo que consideramos como positivo.

En diversas ocasiones pudimos observar que el Juzgador, al momento de examinar el Acta de Consignación, no realiza un análisis a conciencia de las posibles deficiencias del documento que recibe del Investigador, es decir, no constata que hayan sido debidamente fundados y motivados tanto los elementos del Cuerpo del Delito como la Probable Responsabilidad.

En el Auto de Radicación pudimos detectar que, en algunas ocasiones se omitía fijar la competencia.

Al igual que en AE, debemos mencionar que recibimos la queja generalizada del exceso en la carga de trabajo y la deficiente preparación de los Defensores de Oficio.

Además, respecto de la prescripción observamos que el estudio de la misma sólo se hace cuando parece evidente que ya ha transcurrido el término para que opere la misma.

Pasando a la siguiente etapa procesal, debemos mencionar que en el Auto de Plazo Constitucional no encontramos que se señalara el tipo de procedimiento que se llevaría a cabo.

Mencionamos lo anterior pues de los comentarios vertidos tanto por las y los funcionarios de los juzgados, la/los usuarios y abogados entrevistados recibimos la queja de que, además de los probables responsables casi nunca están enterados de lo que sucede durante el proceso y sólo firman donde les dicen que firmen, en muchas

ocasiones no les leen lo que dicen que les leen, y en algunos juzgados, en el pasillo donde se encuentra el probable responsable no se escucha lo que sucede en la audiencia, si es que se lleva a cabo una sola audiencia a la vez, pues por la sobrecarga de trabajo, es común que se llevan a cabo dos o tres audiencias, lo que provoca mayor vulnerabilidad y merma de la certeza jurídica.

En este orden de ideas, debemos mencionar también que detectamos que, en diversas ocasiones, se omite hacer del conocimiento del procesado las garantías otorgadas por el Artículo 20 Constitucional.

Durante el desarrollo del proceso encontramos que el apoyo a las víctimas es prácticamente nulo; detectamos que lo más común es que no se informe a la víctima de sus derechos.

Para el caso de que la víctima sea menor de edad, detectamos que en muy pocas ocasiones se hacen valer sus derechos, y que el Ministerio Público no cumple con su obligación de representar los intereses del menor involucrado, particularmente en relación con los derechos de la familia.

Algunos de las y los funcionarios entrevistados nos mencionaron que no le daban atención ni brindaban ayuda a las víctimas por la naturaleza de sus funciones, pues sería, de acuerdo a su dicho, actuar como juez y parte, por lo cual les podrían fincar alguna responsabilidad.

Pudimos observar que no existen medidas precautorias para los familiares de la víctima, e inclusive, en algunos casos tampoco existen dichas medidas para la propia víctima.

Respecto de la reparación del daño constatamos que es muy difícil obtenerla por diversas razones, de entre las cuales podemos señalar que no es solicitada oportunamente, esto es, que ocurre ya muy avanzado el proceso. Incluso es hasta que la Representación Social formula sus conclusiones y al momento de hacerlo, omite proporcionar datos que pudieran aportar mayores elementos para que el juzgador pudiera fijar un monto que pudiera satisfacer dicha reparación.

Además, pudimos observar que no existe formato alguno relativo al examen psicofísico, y en los casos que se encontró dicho examen, generalmente, no estaban debidamente firmados por el profesional que los llevó a cabo.

Durante el análisis encontramos que la práctica de los Careos Procesales y Constitucionales es poco común.

Respecto de los careos debemos mencionar que encontramos algunos casos donde el Juzgador permite y ordena Careos Procesales y Constitucionales entre el agresor y la víctima, siendo ésta menor de edad.

Debemos señalar que en muy diversas ocasiones encontramos errores al momento de fundar las actuaciones, esto es, encontramos que es muy común que señalen erróneamente Artículos del Código penal.

Inclusive, hayamos un caso extremo donde se inicia la Averiguación Previa, se consigna y se sentencia a una persona en base a un Artículo del Código Penal que desde ese momento y hasta ahora se encuentra derogado.

Durante el análisis de expedientes, así como en las visitas realizadas a los diversos juzgados familiares y penales de AL pudimos constatar que el juzgador muy ocasionalmente está presente en las actuaciones, por tanto, no es muy común que tenga contacto con el Procesado o con la víctima.

Debido a la mala integración de los expedientes y a la deficiente acreditación del cuerpo del delito la mayoría de sentencias son absolutorias o con penas muy bajas.

Además, en los casos de sentencias condenatorias encontramos que es muy común que el Juzgador haga caso omiso de la petición del pago por reparación del daño que le formula el Ministerio Público, en caso de que la solicite, principalmente en cuanto al daño moral.

Es muy común, para los casos de víctimas de delitos sexuales, que se omita ordenar y dar seguimiento a la reparación del daño psicológico, siendo esta omisión más grave para aquellos casos en los que la víctima es menor de edad.

Encontramos también que es común que en la apelación, tratándose de sentencia condenatoria, se modifique la sentencia, reduciendo la pena impuesta en beneficio de los sentenciados.

Finalmente debemos comentar que el desconocimiento, en materia de Derechos Humanos de las Mujeres consignados en Tratados Internacionales, es absoluto. Sólo algunos jueces tienen una muy vaga idea de lo ordenado por CEDAW o Belem do Pará.

Entidad Federativa AF

Fortalezas:

Algunas Instituciones Públicas como el caso del DIF, utiliza los Tratados internacionales como la Convención de los Derechos de los niños y de las niñas, cuando llega a intervenir en los Juicios de Adopción, Pensiones Alimenticias. Otras como la Procuraduría de la Defensa del menor y de la Familia ocasionalmente han referido párrafos sustanciales de la Convención Belem Do Para (pero en un juicio de materia Penal-Violación), en diligencias de procesos Judiciales. Además es importante

mentonar que algunos juzgadores/as en sus sentencias han llegado a hacer uso de Jurisprudencia que refieren la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños.

Los acuerdos emitidos por los diversos Juzgados del estado, ya se puede llevar un seguimiento de su publicación vía Internet, pero todavía no se adopta un mecanismo tecnológico que permita leer íntegramente su contenido.

Leer derechos a la víctima y al acusado

Realizar notificaciones y emplazamientos (también al ofendido)

Nombramiento de defensores y asesores (particulares y de oficio)

Se forman por duplicado los expedientes que se integran por motivo de los procesos penales.

Debilidades:

Actualmente en AF se alberga desinterés y falta de sensibilidad en el tema de los derechos humanos de las mujeres por la mayoría de los funcionarios en cargados de administrar e impartir justicia en todos sus niveles.

De primer momento se podría decir que la mayoría de los y las jueces así como los Magistradas/os, no tienen claro lo que significa la importancia de la protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en nuestro país, es decir al referirles que diversos Tratados y Convenios Internacionales (CEDAW, Belem do Pará) son un gran avance en el terreno del reconocimiento de derechos, algunas funcionarias suelen comentar por ejemplo que el Artículo Cuarto de la Constitución General de la República ya determina que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y son iguales ante la Ley, sin tomar en cuenta lo que cita el Artículo 133 de nuestra Carta Magna en relación a que los Tratados Internacionales ratificados por el gobierno Mexicano tiene la categoría de Ley Suprema.

Si bien es cierto el Tribunal Superior de Justicia de AF cuenta con un Departamento de orientación familiar que es como un especie de instancia negociadora ante los conflictos y controversias de orden familiar, en la vía de los hechos se trata de un filtro que establece el Poder Judicial que ayuda a eliminar y abatir trámites de demandas y procesos traducidos en cargas de trabajo, ya que su mayor interés se traduce en que las partes en conflicto lleguen a un “Convenio” a como dé lugar pasando por alto en la mayoría de los casos antecedentes de violencia física y moral cometidos contra mujeres, menores de edad (lesiones físicas, amenazas de muerte, violencia económica, etc.)

Es decir el personal que se encuentra al frente del departamento de orientación familiar su principal motivación es la negociación de las partes en litigio, sin tomar en cuenta la existencia de elementos de violencia sistemática, hechos que sin duda son constitutivos de delitos. Por su parte la Representación Social adscrita de igual manera no presta atención a dichas situaciones, y cuando se llegan a dar este tipo de Convenios de manera simple sólo hace uso de la voz en la audiencia para pronunciar que dicho arreglo se ha realizado conforme a derecho y solicita su aprobación. O bien, suele enviar a las partes en controversia a sesiones de terapia con el perito en psicológica con el fin de que puedan arreglar en una última instancia sus diferencias.

Algunas/os juezas/ces han llegado a tratar de convencer a las partes en los juicios de divorcio de que no rompan el vínculo matrimonial buscando proteger a la institución familiar.

La dinámica de los Juzgados foráneos ubicados en zonas rurales de AF (que por lo regular son mixtos) presenta deficiencias en cuanto a falta de personal, ya que el mismo trabajador o trabajadora habitualmente realiza tareas de todo tipo acorde más bien a las necesidades inmediatas del Tribunal Local (la intendente de un Juzgado es también Oficial de Partes). La proyectista a veces se transforma en Secretaria de Acuerdo, etc. En otro Juzgado la Juez no cuenta con personal Proyectista por lo que dicha funcionaria no tiene otra opción más que de realizar tareas técnicas.

En los expedientes formados con motivo de los diferente Juicios en materia civil, todavía no existe la práctica de hacer duplicados de los mismos.

Los espacios para el desarrollo de las audiencias son reducidos en comparación al número de personas que hacen uso del mismo.

En los procesos o juicios civiles en AF no existe la práctica por parte de la Autoridad de merito de asistir a la actora con ayuda médica o psicológica.

La/el Jueza/ez, en la mayoría de los casos nunca decreta la práctica de alguna diligencia para mejor proveer.

En cuanto a la reparación de daño de la víctima nunca se establecen mecanismos ni bases para su establecimiento.

En las sentencias en muy pocas ocasiones las/los juezas/ces transcriben criterios de Jurisprudencias, por lo regular apoyan sus resoluciones en tesis aisladas. Además que en ocasiones retrasan el termino legal para resolver.

El Ministerio Público en sus Determinaciones y Conclusiones Acusatorias no establece en cantidad líquida el monto referente a la reparación de daño de la víctima u ofendida sólo lo refiere y mucho menos promueve incidente de ejecución forzosa, ni alguna medida precautoria, como tampoco embargos precautionarios para garantizar el pago a la víctima directa ni a las víctimas secundarias. Y en el mismo sentido no aplica ni fundamenta con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No existe la tradición de apoyar a los causahabientes de la víctima (padre, madre, hija/o, familiares) con ayuda psicológica médica en ocasiones la legal ni se otorga.

El Jueza/ez, en la mayoría de los casos no decreta la práctica de alguna diligencia para mejor proveer (v.g. es muy raro que soliciten nuevos peritajes o otras pruebas para clarificar a lo máximo ciertas cuestiones esenciales en materia de controversia).

No suele apoyar a la víctima o familiares con medidas de protección (cautelares, precautionarias).

Los recursos de defensa por parte del Ministerio Público en algunas ocasiones son deficientes en cuanto a su argumentación técnica legal, lo que ocasiona que no se lo logra convencer plenamente los jueces/as de alzada y pocas veces modifican Sentencias injustas.

Los jueces/as no reproducen en sus resoluciones el uso de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres ni de ningún otro tipo.

Entidad Federativa AR

Fortalezas:

Los recursos humanos del poder judicial, constituyen la mayor fortaleza al adecuar el personal que labora en los juzgados con confianza y solidaridad el apoyo a los jueces y dependencias, en el despliegue del quehacer público cotidiano, que incluso, en ocasiones va más allá del horario laboral formalmente instituido, en jornadas que exceden las más de la veces a las asignados por ley,

La infraestructura es moderna y funcional así como el aprovechamiento óptimo en general de los recursos materiales enfocados principalmente a garantizar la independencia e imparcialidad, así como sistemas control y transparencia que se reflejan tanto en la infraestructura tecnológica, material y administrativa (Oficialía de partes, Central de actuarios y notificadores, consignaciones, Instituto de especialización judicial, el sistema praxis, así como las situacionales tecnológicas tales como circuitos cerrados, cámaras, etc.,).

En particular la red de de sistematización que funciona desde el año 2005, que contempla entre otros servicios al público las tecnologías en informática que garantizan las obligaciones de transparencia a través del Portal de Internet del Tribunal Superior de Justicia AR, que prevé también: Sistemas para Control de Firmas de Juzgados Penales; Sistema Integral de Juzgados Civiles y Familiares; Sistema del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; Sistema del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial; Sistema Integral de la Coordinación de Actuarios; Sistema de Oficialía de Partes de Juzgados Civiles, Familiares y Municipales, Sistema Integral de Recursos Humanos; Sistema Integral del Archivo General; el Sistema para el Registro de Usuarios, que permite a los usuarios el acceso a la información y documentos a través del Internet.

Al proporcionar servicios como la consulta a expediente electrónico y boletín personal; las listas de acuerdos para todos los juzgados de primera instancia del Estado, Juzgados Municipales, Sala Civil y Sala Electoral oferta dirigida al público en general. Así como la agenda jurídica personal, Citas y cancelaciones en coordinación de actuarios civiles. Dicho portal contiene el Directorio de Funcionarios y números telefónicos; la historia del Tribunal Superior de Justicia y muestra algunos archivos históricos; posibilitando el acceso también a la Biblioteca Judicial.

El contar con un Instituto de Especialización Judicial encargado de la capacitación, actualización, profesionalización y desarrollo de los servidores públicos, y de quienes aspiren a pertenecer a ese poder.

Contar con el Centro de Mediación, que permite a los usuarios, desde figuras alternas dirimir los problemas hasta encontrar la solución, voluntaria y gratuita, en el caso de delitos no graves, y de manera confidencial, rápida y económica.

Contar con la infraestructura y sistemas modernos electrónicos que posibilitan al juzgador la consulta del marco normativo mexicano, tales como las contenidas en la legislación nacional y/o de origen estatal así como a criterios jurisprudenciales.

Las relaciones interinstitucionales que hacen factible la atención de las víctimas mujeres y/o menores que requieren protección de los derechos de familia, que vincula el quehacer del poder judicial con otras instituciones.

La Probidad con la que se conducen el personal de los juzgados penales, que se refleja en el imaginario tanto de los abogados como de los usuarios, enfatizando la ausencia de casos de corrupción concretos.

Los procedimientos que se instruyen en aquellos delitos donde las víctimas son menores de edad, por parte de los juzgadores cobra especial atención, para efecto de salvaguardar su integridad.

En las resoluciones los jueces en términos generales invocan los criterios del Consejo en Pleno que permite una mejor consistencia, coherencia y predictibilidad de dichas resoluciones.

Según el estudio realizado se identificó la ausencia de la corrupción sistémica en el Poder Judicial, debido a varios factores los cuales son: un control y supervisión por parte de medidas tecnológicas situacionales, la intervención de los jueces, así como un nivel bajo del efecto corruptor.

El otorgamiento del beneficio de suspensión al procedimiento, para efecto de evitar estigmatizar al procesado, con antecedentes penales en el caso de que se resolviera determinándose su culpabilidad.

Tanto las encuestas como las observaciones en situ muestran que el personal de los juzgados da un trato humano y digno a los menores, sus familiares, a las víctimas y ofendidos.

El Juez ejerce un control y supervisión interno del personal. Dicha práctica permite que evitar los abusos ya que el personal está conciente de que se son sujetos al control de supervisión por parte del juez así como a las sanciones de conformidad con la ley.

Debilidades:

Adolecen de la asignación presupuestal anual suficiente.

La marcada diferencia en las remuneraciones que reciben los servidores públicos dependientes del poder judicial y que laboran en los juzgados.

La percepción que tienen diversos servidores públicos dependientes del poder judicial que laboran en los juzgados al considerar que las condiciones para acceder a los ascensos estén determinadas por otras de naturaleza externa, más allá de las formalidades previstas en el poder judicial.

La omisión de los órganos jurisdiccionales en su mayoría de imponer en la práctica, medidas de seguridad tendientes a proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, así como a los testigos que depongan en contra de los imputados.

La inaplicabilidad de los tratados internacionales de los derechos humanos para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de los órganos jurisdiccionales en AR.

La ausencia de los recursos materiales y humanos para efecto de dotar de asistencia psicológica al personal de los juzgados, que lo requieren derivado de su quehacer público, la cual deberá garantizar la más estricta confidencialidad.

La inexistencia de protocolos obligatorios, lineamientos o manuales para la atención a mujeres que viven violencia.

La carencia de espacios privados para el desahogo de las diligencias que requieren especial protección a los derechos de las víctimas y/o mujeres ofendidas.

La omisión de las autoridades jurisdiccionales de estar presentes en todas la audiencias y diligencias que se desahoguen durante proceso penal, así como la existencia de mecanismos que aseguren efectivamente su presencia.

La inexistencia de información a la vista que permita en todos los recintos del poder judicial que las personas conozcan los derechos que asisten a las víctimas, a los procesados, así como las obligaciones a cargo de los servidores públicos, y que les permita conocer la existencia de los mecanismos de defensa y de denuncia como control de legalidad hacia la autoridad.

La discrecionalidad en cada caso a cargo del juzgador para determinar las acciones a realizar en el desahogo de aquellas diligencias que ponen en riesgo psíquico o emocional a las víctimas, las cuales están matizadas por estereotipos o preconcepciones previas determinadas por roles de género.

El incumplimiento puntual a las obligaciones contraídas en CEDAW y Belem Do Pará a cargo del poder judicial, respecto a garantizar el seguimiento y compilación de información para las estadísticas y demás pertinentes sobre las causas, consecuencias y frecuencia de violencia contra la mujer, con el fin de evaluarla la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.

El exceso en las cargas de trabajo de los juzgados que no se soluciona a partir del incremento de la plantilla laboral en el juzgado, si no que se requiere la apertura de más juzgados.

La opacidad y la discrecionalidad con la que se conducen algunos jueces penales, impidieron el acceso a los expedientes, análisis que constituía una parte relevante del presente estudio.